

La prensa y el estado: los caminos de la sujeción

RAYMUNDO RIVA PALACIO

Hace no mucho, el director de Comunicación Social de una importante dependencia del gobierno federal llamó por teléfono al dueño de un periódico capitalino para regañarlo porque no acató las instrucciones que le había dado.

En otra ocasión, dos altos funcionarios llamaron con urgencia al director de un diario del norte del país para amenazarlo por haber publicado un editorial contra el presidente Carlos Salinas.

A lo largo de la administración salinista se le han practicado auditorías a un buen número de periódicos. A uno de ellos, caracterizado por mantener una posición de independencia ante el gobierno, las auditorías fiscales se extendieron hasta al propio dueño, sin encontrarle ni a él ni a la empresa anomalía alguna.

Contrariamente, al propietario de un periódico que optó por el apoyo acrítico hacia la gestión salinista, cuando le encontraron irregularidades fiscales le perdonaron que fuera a la cárcel únicamente con pagar los impuestos evadidos.

Estos ejemplos, apenas si unos cuantos botones de muestra, representan el día y la noche de la compleja y nunca clara relación que maneja el gobierno con la prensa. No hay una definición clara acerca de qué es lo que quiere él con ella.

Dos directores de medios recuerdan, en privado, cuando le preguntaron a Salinas, antes de que tomara posesión, que cuál sería su relación con la prensa, a lo que el entonces presidente electo respondió: «La que ustedes mismos marquen.»

Inquietante la respuesta por su fondo, pero tampoco ha sido diáfana. En realidad la relación de la prensa con el gobierno está muy alejada de ser *la que ustedes marquen*, más bien ha sido la que marquen los tiempos políticos. Así es y así fue desde que Salinas estaba por comenzar su campaña. En aquel entonces varios de sus asesores de prensa quisieron modificar las viejas reglas del juego: ya no pagar los gastos de viaje y viáticos a los medios: en adelante los tendrían que pagar los interesados en la cobertura.

El principio de transparencia en esa relación oscura se hundió ante la premisa de otros asesores políticos del entonces candidato, quienes afirmaron que, ante la debilidad de Salinas en esos momentos, no deberían de alimentar a sus enemigos. «Cuando lleguemos al poder, las cosas cambiarán», llegó a decir uno de ellos.

Pero llegaron al poder y las cosas no cambiaron. De hecho, en algunos sectores han empeorado. Las presiones y las amenazas sólo son algunas de las herramientas que se utilizan: aunque es justo señalar que son las menos veces, ya que, en su mayoría, la prensa se ha convertido en una víctima dócil que cae en lo abyecto mediante la adulación o la venta de su conciencia.

Para aquellos periodistas que se niegan a asimilar las viejas reglas del juego -minoría aún, pero en aumento cada día- las presiones continúan. Todavía no desaparecen aquellos funcionarios quienes, descontentos con el trabajo de algún colega que generalmente les incomoda por el simple hecho de pretender ser profesional en su oficio, acostumbran hablar con los dueños o directores de los medios para pedirles que lo remuevan e incluso que lo despidan. En fechas recientes ha habido quienes ceden ante esas peticiones; sin embargo, también se han dado casos de rechazo.

Las relaciones prensa-gobierno están intrínsecamente enredadas en un enjambre donde con frecuencia hay un déficit, en ambas partes, entre los principios y el profesionalismo. Los valores son comúnmente trastocados y el error de origen comienza con la falta de códigos en la ética de la prensa mexicana.

Ningún medio en el país dispone de un código de esa naturaleza, aunque es justo señalar que algunos medios como El Norte, de Monterrey, han elaborado reglas claras para evitar que sus reporteros caigan seducidos por los jefes de prensa que, en México, tienen como principal función la de esconder la información y saturarlos de regalos.

Resultado de esa falta de códigos en la ética profesional es la inexistencia del principio del conflicto de interés. Se dan los casos, por ejemplo, de que el jefe de información de algún periódico importante se ocupe de las relaciones públicas de equis gobernador del centro del país; o también que algunos periodistas en alza cobren sueldo como asesores de políticos. Hay columnistas, afamados y oscuros, que en diversas oficinas públicas llegan a cobrar las famosas compensaciones, con un mínimo de un millón de pesos. De todos ellos, ¿cómo puede esperarse el lector una información y un análisis balanceado y justo?

Lo mismo puede decirse de los columnistas que transcriben textos redactados en diferentes dependencias del gobierno. No son pocos los funcionarios que primero con sorpresa, después con sorna, y más adelante con desprecio, mencionan a quienes han reproducido lo que ellos analizaron y redactaron.

La razón por la que esos periodistas acceden obedece, por un lado, a la seducción que sobre ellos han hecho los funcionarios (llamándolos por su primer nombre, hablándoles por teléfono, invitándolos a comer o a tomar café, o haciéndolos copartícipes de algunos de sus pensamientos y proyectos), y por el

otro, a las recompensas económicas que reciben.

Vale aclarar que, contrariamente a la creencia popular, no es el soborno directo la principal fuente de corrupción, sino las retribuciones indirectas. Hay dependencias que no les entregan dinero en efectivo a los periodistas, en cambio les facilitan permisos aduaneros, de importación, de exportación, les resuelven casos judiciales o les dan trabajo en niveles importantes a sus recomendados. Es decir, algunos periodistas pasan a jugar el papel de coyotes: les cobran a quienes solicitan sus servicios.

Otra forma importante de corrupción, tan cotidiana que ya hasta se perdió de vista el problema de fondo, es la distribución de la publicidad. Por esta vía, políticos y jefes de prensa tratan de controlar y manipular la información. En la mayoría de los periódicos los reporteros llevan una comisión (entre 5 y 15 por ciento) por la publicidad que generen las dependencias cuya fuente les corresponde cubrir y que siempre supera en más del 100 por ciento sus salarios nominales.

Esta es la razón por la que no suelen arriesgar la pérdida de esos ingresos, en tal forma que prefieren omitir toda la información adversa a la dependencia que les da publicidad. Sin embargo, también hay que señalar que son varios los medios en donde sus reporteros no reciben comisiones de publicidad con el fin de evitar, primero, convertirlos en ven-deplanas y después anular las posibilidades de que sean víctimas de chantajes morales y económicos.

No son pocos los dueños y directores de periódicos que aceptan de buena gana estas reglas del juego de la publicidad que impone el gobierno. Cierran los ojos cuando hay un soborno directo, con la premisa de que es una compensación a los bajos salarios que ellos pagan. Por esa misma razón propician la derrama de publicidad entre los propios periodistas. La turbiedad que provocan sus acciones, y que repercute de manera directa en la información que se le ofrece al lector, no parece importarles mínimamente.

Y todo se debe, principalmente, a que en México la mayoría de los medios impresos no viven de ni para sus lectores, sin exagerar. Sus ingresos no provienen de la venta de sus ejemplares, aunque ello necesariamente elevaría su lineaje publicitario no gubernamental. No: sus ingresos provienen en lo fundamental del sector público, a quien por lo que se ve no le importa que el producto entregado al lector sea de calidad o no.

En México, los periódicos no son el espejo de la sociedad ni el puente entre gobernantes y gobernados. En México, los periódicos son simplemente el medio por el cual la clase política se intercambia mensajes.

Es importante resaltar, empero, que también hay diversas empresas que lejos de ceñirse a ese esquema buscan afanosamente la manera de llegar a la sociedad. Algunos periódicos del norte del país han incursionado en ese camino con gran éxito, como el semanario Zeta de Tijuana o el diario El Imparcial, de Hermosillo. En el Distrito Federal La Jornada ha explorado para bien el contacto con las comunidades universitarias, sin olvidar sectores que habían sido frecuentemente olvidados (como el de las mujeres), además de darles espacio a los grupos marginados que carecían de un foro donde expresarse.

Asimismo hay medios donde sus estructuras han tratado de romper, con distintos grados de éxito, las jefaturas que hay en la relación prensa-gobierno.

Entre ellos puede citarse al periódico El Financiero, que ha dado cabida a personas de distintos orígenes y tendencias.

El mejor ejemplo de esa lucha lo da, sin lugar a dudas, la revista Proceso, quien desde noviembre del 76 todos los lunes se ha convertido en lectura obligada para simpatizantes y enemigos.

Más allá de que sus textos gusten o no, los medios que han buscado llegar a un mayor número de gente y no sólo a los gobernantes se han ganado la credibilidad de sus lectores; lo que significa una divisa invaluable en estos momentos en los que la crisis de la credibilidad se asoma por diferentes sectores del país. En la prensa, la falta de credibilidad de los lectores se refleja en la circulación que tienen sus ejemplares.

Personas con acceso a información privilegiada sobre el tiraje de los periódicos en la ciudad de México sostienen que la circulación real de los diarios de información general no llega al medio millón de ejemplares, cifra dramática al considerar que hay más de 30 diarios en el Distrito Federal y que en forma combinada imprimen casi el 50 por ciento de lo que tira The Washington Post en una ciudad que es la décima parte del Distrito Federal.

Los tirajes de los diarios capitalinos son ridículos. De acuerdo con esas fuentes de información no son más de diez los diarios que imprimen volúmenes superiores a los 10 mil ejemplares por día. Diarios que se consideran nacionales porque dicen que llegan a todo el país, no alcanzan a tirar más de mil ejemplares por día; otros que anuncian tirajes superiores a los 150 mil, en realidad apenas si alcanzan los cuatro mil.

Hay un importante diario, lectura obligada para la clase política mexicana, que apenas si logra vender 18 mil ejemplares en la ciudad de México; asimismo hay otro al que importantes funcionarios le han tratado de inyectar gran cantidad de estamina pero que no imprime más de ocho mil ejemplares.

No obstante, los ingresos de una gran mayoría de ellos son copiosos. Hay uno que cuando tenía una circulación de cinco mil ejemplares obtuvo ganancias por mil 500 millones de pesos. Así como ese, hay muchos más que, sin publicidad privada, sobreviven holgadamente. ¿A qué se debe? A que el erario público los alimenta por medio de propaganda política disfrazada de información: con gacetillas y noticias pagadas.

No debería de extrañar, entonces, que un buen número de medios respondan ciegamente a las consignas del gobierno ya que dependen de él en su lucro y subsistencia.

Este es un panorama sombrío de la prensa, de una institución que se ha acomodado perfectamente a la convivencia con y para el gobierno a cambio de dádivas, prebendas y privilegios. Su relación con él está permeada por viejos vínculos oscuros, por usos y costumbres. Sin embargo, decir que toda la prensa y todos los periodistas se manejan con estos esquemas sería ignorar los matices que se dan dentro de la prensa misma, así como a aquellos medios y periodistas que luchan por modificar las reglas del juego que han tamizado por décadas la relación con el poder.

La prensa no era corrupta, la hizo el sistema en el cual se desarrolló. La prensa, cierto, se acomodó del lado fácil, de la complacencia más que de la discrepancia, de la genuflexión más que de la crítica. Gobiernos sucesivos han agradecido su ductilidad y la han recompensado. El problema es que esa relación se ha convertido en un juego de valores entendidos entre las élites, donde la sociedad se mantiene al margen; aunque eso sólo es etapa transitoria, pues conforme la sociedad avance, la prensa irá rezagándose más y más, hasta dejar de ser la vanguardia que era, para convertirse en una distante retaguardia.

La disyuntiva es que cambia o se muere. Sobrevivirán las instituciones capaces de dar ese paso y enfrentar una nueva realidad. Ni el gobierno ni los políticos que durante décadas la han cultivado y enriquecido con ojos cómplices, pero que cada vez se va haciendo menos útil en circunstancias distintas, podrán detener la caída de aquélla que se niegue a cambiar.

Quizá entonces llegará el momento, actuado ahora sólo por unos cuantos, en que la independencia, la autonomía y el derecho a existir por méritos propios llegue avasalladoramente a la prensa. Quizá hasta entonces la democracia comenzará a tener parte de su cuerpo.